

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL  
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	DIANA PATRICIA MARÍN PÉREZ
DEMANDADO	FIORY S.A.S.
RADICADO	05001-31-05-012-2020-00179-01
ORIGEN	JUZGADO DOCE LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
TEMAS Y SUBTEMAS	-DECRETO DE PRUEBAS– SOLICITUD EXTEMPORÁNEA
DECISIÓN	CONFIRMA

AUTO INTERLOCUTORIO No. 444

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N° 038 de 2023, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la parte **DEMANDANTE**, contra el Auto a través del cual resolvió negar el decreto de la prueba pericial solicitada por aquella, providencia dictada el 23 de mayo de 2023 por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

La señora **DIANA PATRICIA MARÍN PÉREZ** promovió demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad **FIORY S.A.S.** con el fin de que: **1)** Se declare la existencia de una relación laboral entre las partes, vigente desde su fecha de ingreso a la fecha. **2)** Así mismo, peticionó declarar que está amparada por estabilidad laboral reforzada en razón a su estado de salud, derecho adquirido que deberá respetar la empresa. **3)** En consecuencia, solicitó ordenar a **FIORY S.A.S.** que respete ese derecho y la sostenga en el trabajo (reintegre), dado que en acción anterior quedó registrado el despido del que fue objeto, sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. **4)** Así mismo, se disponga que la demandada continúe realizando los aportes al sistema general de seguridad social integral, durante el tiempo que perdure el contrato, y pueda acceder a la pensión y atención en salud necesarias, sin disminuir las condiciones de trabajo, con el debido respeto a las recomendaciones médicas y el derecho al mínimo vital. **5)** Pidió ordenar a la empresa que cese la persecución laboral por sus condiciones de salud, y que proceda a cancelar los restantes salarios, primas de servicios y conceptos legales que ha vulnerado y disminuido (Archivo 03 ED).

Mediante Auto del 31 de julio de 2020, el Juzgado de primer grado admitió la demanda, disponiendo la notificación de la entidad accionada, la cual, una vez enterada de la iniciación del proceso, procedió a contestar la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones (Archivos 07 y 17 ED).

A su vez, la parte accionante mediante memorial radicado en el buzón electrónico del Despacho de primera instancia el 21 de julio de 2021, anunció la adición de la demanda en los términos del artículo 28 CPLSS, a través del cual aportó dictamen de calificación de pérdida

laboral de la demandante, junto con el comprobante de pago de esta valoración, solicitud sobre la que no se observa que se hubiera dado trámite por parte del Juzgado (Archivo 12 ED).

### PROVIDENCIA APELADA

En la audiencia del artículo 77 CPLSS, en la etapa pertinente, a través de Auto del 23 de mayo de 2023, la Juzgadora de conocimiento negó el decreto como prueba, del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral allegado por la demandante, por considerar que el mismo no se arrió en las oportunidades procesales correspondientes, es decir, en la demanda, o la reforma a la demanda (Archivo 20 ED).

### RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte **DEMANDANTE** presentó recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión de negar el decreto de prueba al dictamen de calificación referido, tras considerar que el mismo es requerido para establecer los presupuestos de la ley en relación con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, aspecto que denota la necesidad de la prueba en este asunto, a partir del cual pueda establecerse si tiene o no derecho su representada a la estabilidad laboral reforzada, y con base en esta situación, debía el empleador solicitar el respectivo permiso para despedirla.

En ese sentido adujo que, al ser menester aportar esta prueba, ello se atendió, y para el momento del decreto probatorio, ya reposaba en el expediente, desconociendo los motivos por los cuales se negó por el despacho esta solicitud de prueba.

Al resolver la reposición, el *A-quo* insistió en que, conforme le artículo 173 CGP, en el proceso actual, la parte demandante no aportó la prueba mencionada en las oportunidades que tenía para ello (demanda o reforma), por lo que no había posibilidad de tenerlo como prueba, otorgando en consonancia el recurso de apelación (Archivo 20 ED).

### ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante Auto N° 098 del 14 de agosto de 2023, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión, las cuales omitieron pronunciarse al respecto (Archivo 02 ED).

### PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico se centra en establecer si hay lugar a acceder al decreto de la prueba solicitada por la parte **DEMANDANTE**, o en su defecto, le asiste razón a la Juez de primer grado al negarla por tratarse de una petición extemporánea.

### CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 4° del artículo 65 del CPTSS, según el cual, el auto que niegue el decreto o práctica de una prueba es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

De acuerdo con los argumentos de la alzada, recuerda la Sala que al tenor del artículo 51 CPLSS, en el procedimiento ordinario laboral son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la Ley.

Así mismo, atemperados al artículo 53 *ejusdem*, modificado por el artículo 8° de la Ley 1149 de 2007, el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito, y en cuanto a la prueba de testigos, podrá limitar el número de ellos “(...) cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el proceso (...)”.

En ese orden se observa que, según se extrae del infolio, estando en el curso de la etapa correspondiente al *decreto de pruebas*, la Juez, luego de verificar la oportunidad en que fue aportada la prueba consistente en dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral de la señora **DIANA PATRICIA MARÍN PÉREZ** (Archivo 12 ED), concluyó que esta no había sido adosada para ser tenida como tal, en los momentos procesales fijados para ello, deviniendo así la petición en extemporánea, determinación a la que se opuso el apoderado de la demandante, argumentando que el medio demostrativo solicitado es necesario para lo que se pretende en el proceso, aunado a que este ya reposa en el expediente para el momento de decreto de pruebas.

Para desatar el centro de la controversia, debe resaltarse que, a partir de la expedición del Código General del Proceso, norma supletiva a la que debe acudir en aquellos eventos no regulados en la codificación adjetiva laboral (Art. 145 CPLSS), la dinámica procesal de los litigios, en términos generales, cambió, pues la anterior regulación incluía dentro del rol del Juzgador, la condición de mediar entre las partes, o entre estos y los particulares o entidades públicas, para el recaudo de determinadas pruebas.

Precisamente, con la reforma el legislador quiso comprometer a quienes hiciesen parte de los procesos, estableciendo en cabeza de estos que su actividad o capacidad de gestión girara en torno a la pronta solución de la contención. Ello se desprende, por ejemplo, de los deberes y responsabilidades estatuidas para las partes y sus apoderados en el artículo 78 CGP.

Así mismo, de manera armónica al contenido de la norma en cita, el artículo 173 CGP, aplicable a los contenciosos de índole laboral por la integración normativa (Art. 145 CPLSS), presupuesta para las partes, el respeto a las oportunidades probatorias, exigiendo un trámite mínimo de cara a las solicitudes probatorias. Al respecto, regla: “(...) *Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas para ello en este Código (...)*”.

En ese contexto, el artículo 26 CPLSS establece en su numeral 3° que la demanda deberá ir acompañada de: “(...) 3. *pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder del demandante (...)*”, cuestión que se hace extensiva en los mismos términos a otros escenarios procesales como la reforma a la demanda (Art. 28 CPLSS) o la contestación a la demandas de reconvencción (Art. 75 y 76 CPLSS), entre otros momentos con los que cuenta la parte accionante para efectuar las solicitudes de prueba que considere pertinentes, a fin de demostrar su teoría del caso.

Así mismo, cuando lo que se pretende aportar es un dictamen pericial, el artículo 227 CGP consagra que: “(...) *La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá **aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas**. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días (...)*”. (Subraya y Negrilla de la Sala).

Frente a la temática estudiada, la Corte Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia T-204 de 2018, estudió los pormenores de la presentación oportuna de las pruebas conforme lo indicado en el artículo 173 *ibidem*, y su relación directa con la garantía del derecho de defensa. Al efecto, expresó:

“(...) *A fin de respetar el derecho de contradicción y de defensa en materia probatoria, tanto el Código General del Proceso, artículo 173, como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 212, consagran dentro de sus procedimientos las “oportunidades probatorias”, es decir, los momentos procesales oportunos en los que las partes deben solicitar las pruebas a efectos de que con posterioridad las mismas puedan practicarse e incorporarse al proceso.*

(...)

*El debido proceso probatorio tiene una doble dimensión obligacional, de un lado (i) **las partes, quienes están llamadas a seguir las formas propias de cada trámite y por tanto, solicitar y controvertir las pruebas en las oportunidades previstas para ello** y de otro, (ii) el juez de*

*conocimiento, quien debe asegurarse de que la prueba cumpla con el principio de publicidad, a fin de determinar el momento en que su contenido fue conocido por las partes. Lo anterior, a efectos de no suprimir el derecho de defensa y contradicción de las mismas. (...)”.*

Además, vale anotar lo comentado por la doctrina, que al referirse a los principios que orientan el derecho procesal, ha precisado en punto de la solicitud de las pruebas, aplicable justamente al asunto materia de estudio, que: “(...) *Dentro de la misión de orden y garantía que se asigna al derecho procesal es este aspecto central, pues vulneraría el debido proceso por la dificultad o imposibilidad de ejercitar el derecho de contradicción de las pruebas, el permitir su decreto o aporte en cualquier ocasión, como en veces lo quieren los abogados de conducta perfunctoria que so pretexto de que prima el derecho sustancial sobre el procesal tratan de solicitar o aportar pruebas cuando ya venció la ocasión para hacerlo (...)*”.

Puestas de ese modo las cosas, lo que observa la Sala en el particular es que, al margen de lo considerado por la Juez, al revisar el trámite procesal surtido, previo a la audiencia reglada en el artículo 77 CPLSS, la prueba en comento fue allegada con solicitud de adición de la demanda el 21 de julio de 2021 (Archivo 12 ED), época para la cual ni siquiera se había agotado el trámite de notificación y contestación de la parte demandada, lo que solo vino a darse en el mes de mayo de 2022 (Archivos 16 y 17 ED), situación por la que, nada obstaba para que el memorial arrimado por la parte actora fuese tramitado como una reforma a la demanda en los términos del artículo 28 CPLSS.

No obstante, según muestran las actuaciones vertidas en el expediente digital, el Juzgado de primer grado no dio curso a la petición descrita, como quiera que en Auto N° 1512 del 24 de agosto de 2022, procedió a tener por contestada la demanda por parte de **FIORY S.A.S.**, situación que supone entonces, la **negativa o abstención** del Despacho cognoscente respecto de la reforma a la demanda radicada por la accionante, puesto que, inmediatamente admitida la réplica de la pasiva, fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia obligatoria de conciliación y trámite, la que finalmente se agotó el 23 de mayo de 2023.

Resáltese entonces que, al configurarse el escenario procesal de esa manera, la parte demandante debió recurrir en reposición o apelación la providencia en comento (Art. 63 y 65 CPLSS), a través de la cual se dispuso, implícitamente, no darle trámite a la solicitud de adición, que en realidad era una reforma a la demanda; sin embargo, y al margen de que la Sala considere reprochable o no la actuación del Juzgado, lo cierto es que, la parte interesada guardó silencio, dándose la ejecutoria de la decisión, siendo inviable, entonces, que, obviando lo anterior, pretenda en la etapa del decreto de pruebas pugnar por la inclusión de medios de prueba por los que no insistió oportunamente para efectos de formalizar su aportación.

Bajo ese entendido, en aplicación del ***principio de preclusión***, precisa la Colegiatura que, habiendo aceptado lo decidido por el Juzgado en los términos descritos, no es propio que la parte actora **sustente su inconformidad** únicamente predicando la procedencia del decreto probatorio porque, en su criterio, el medio suasorio invocado (dictamen de pérdida de capacidad laboral - Archivo 12 ED), es necesario de cara al objeto del debate, insistiendo en que para el momento o etapa de decreto de pruebas, el documento ya reposa dentro del expediente, pues tal manifestación contraría el propósito de la regulación legal en materia probatoria que, como se dijo, propende por garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte, siendo clara, tanto la doctrina como la Jurisprudencia, que no pueden evadirse las reglas propias de cada juicio.

Admitir la aducción de esta prueba, sin cumplir las ritualidades para su incorporación en los términos y con las formas propias del juicio laboral, conllevaría a que se viera sorprendida la parte accionada con una prueba – dictamen pericial –, que no fue puesta en conocimiento para su respectiva contradicción en la oportunidad procesal en que se debía adosar como tal; amén que ni siquiera se advierte que el demandante en aplicación de las normas sobre la notificación de demanda a la parte accionada, establecidas en el Decreto 806 de 2020, adoptado como legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, hubiere puesto en conocimiento del demandado, el memorial y documentos anexos que arrimó para la “*adición de la demanda*”, con lo cual por lo menos podría decirse que fuese oponible el contenido del dictamen a su contendiente.

Así se considera, pues nótese que, para el extremo accionante incluso pasaron por desapercibidas las vicisitudes procesales enrostradas en esta providencia, ya que ni siquiera hace alusión a ellas en el expediente, y mucho menos invocó la posible configuración de una nulidad constitucional (Art. 29 CN), a fin de que la Sala pudiera entrar a verificar si la actuación del Juzgado generó una transgresión a sus garantías procesales.

Aun así, no puede olvidarse que, al tenor de los artículos 54 CPLSS y 169 CGP, la Juez de primera instancia está dotada de amplitud probatoria, estando en la posibilidad de decretar oficiosamente, y hasta antes de dictar sentencia, las pruebas que considere necesarias con el fin de verificar la ocurrencia de los supuestos facticos que componen la fijación del litigio.

En consecuencia, habrá de confirmarse la decisión, pero por las razones expuestas en la presente providencia. Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** el Auto del 23 de mayo de 2023 emitido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, a través del cual negó la solicitud de prueba efectuada por **DIANA PATRICIA MARÍN PÉREZ**, pero por las razones expuestas en el presente proveído.

**SEGUNDO:** Sin **COSTAS** de esta instancia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 187 del 01  
de noviembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>